

LOS DOS CUERPOS POLÍTICOS DE LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

Por Sheldon Wolin*

En el lapso de unos pocos años, a medida que los norteamericanos observaron el deterioro manifiesto del poder de su nación, interna y externamente, han experimentado algo desconocido en la historia norteamericana desde comienzos del siglo diecinueve: un sentimiento de vulnerabilidad colectiva. Los diversos ídolos de nuestra caverna común -del poder ilimitado, del crecimiento, de la prosperidad- se han derrumbado, privándonos de la imagen colectiva por la cual habíamos llegado a reconocernos a nosotros mismos, al coloso norteamericano que viajaba a horcajadas del siglo norteamericano. Esto ha generado gran cantidad de angustiosos comentarios: sobre la dependencia del país (respecto del petróleo y del capital extranjeros, etc.); sobre las condiciones que otras naciones pueden imponernos; sobre los Estados Unidos considerados más como víctima que como una potencia autónoma.

El hecho de que los norteamericanos están comenzando a percibir a su gobierno como desprovisto de fuerza se ve confirmado por la asombrosa rapidez con que la "crisis de los rehenes", de un incidente pasó a ser un símbolo general de impotencia nacional. La incapacidad del gobierno en cuanto a imponer su voluntad sobre una muchedumbre conducida por un débil fanático parece una prueba de que el inundo familiar se ha invertido súbitamente: *ellos* eran fuertes y estaban convencidos de su rectitud, *nosotros* estamos desorganizados y nos sentimos moralmente ambivalentes. El sentimiento de debilidad de la nación se vio profundizado aun más por la respuesta del presidente a la invasión rusa en Afganistan, debido a la incongruencia entre su interpretación del acontecimiento y sus acciones. "La invasión soviética -declaró-- puede plantear la amenaza más seria a la paz desde la Segunda Guerra Mundial". Propuso conjurar ese peligro a través de una serie de actitudes: el boicot de los juegos olímpicos, la imposición de un embargo sobre los cereales y sobre la tecnología más avanzada y la institución de un sistema de registro para un posible reclutamiento.

Quizás la mayor prueba de la difundida percepción de impotencia esté en la angustia con la que prácticamente todos los segmentos del pueblo norteamericano han respaldado los incrementos extraordinarios en los gastos de defensa habidos durante la década pasada. Indudablemente estas tendencias han sido fomentadas y orquestadas por los representantes de regiones geográficas y por sectores específicos de la economía, así como han sido entusiastamente impulsadas por muchos sindicatos. Pero saber quién está "detrás" de la escalada en los gastos militares es menos importante que captar su significado. El amplio apoyo se debe a un profundo temor de pérdida del poder colectivo y a la desesperada esperanza de que una inmensa inyección de dinero contrarreste la declinación del poder.

La confianza en la tecnología bélica para revitalizar el poder de los Estados Unidos marca un desplazamiento en la teoría y la práctica del poder en este país. Como todos sabemos, las armas actuales son los productos de una economía que resulta notable por integrar conocimiento científico, adaptación tecnológica de ese conocimiento y transferencia de la tecnología a la producción masiva. Esta economía se ha ido convirtiendo cada vez más en un medio de producir el poder del Estado, antes que de manufacturar bienes y servicios. Sus productos, ya sea armamentos, alta tecnología o los alimentos de la agroindustria constituyen esencialmente fichas para ganar ventaja en el mercado político de la economía internacional del poder. Así, la economía interna produce formas de poder que, por su naturaleza y diseño, sólo pueden ser usadas por el Estado, cuyo símbolo es el Pentágono, donde los representantes "públicos" y "privados" mezclan sus identidades y rotan sus puestos. Lo que la economía interna no produce es poder democrático: los bienes materiales, culturales y educacionales que le permiten a la gente común obtener dignidad, comprensión y poder. Los presupuestos para defensa son la forma cuantificada de nuestro sometimiento interno y de nuestra impotencia personal. Cada bomba neutrónica es el símbolo ritual de mil o más niños destinados a continuar en la ignorancia, espiritualmente vacíos, incompetentes y moralmente atrasados.

El interrogante que este desarrollo plantea es: ¿qué significa para los Estados Unidos basar su existencia colectiva en el tipo de poder encarnado en una economía altamente desarrollada cuyos efectos destructivos sobre la naturaleza, la sociedad, el cuerpo y la psiquis humana aparecen diariamente documentados, con deprimente regularidad? El punto tiene que ver con nuestra identidad política, con lo que somos en tanto pueblo.

La identidad política es conformada por las maneras que la sociedad escoge para querer poder y para ejercerlo. Las sociedades deben generar poder si desean sobrevivir en el mundo, y tienen que estar constituidas de tal

* Director del Postgraduate Program in Political Sciences de la Universidad de Princeton y director de la revista *Democracy*, donde apareció la versión original de *este* trabajo (vol. 1, núm. 1, enero de 1981).

manera que lo generen constantemente. La forma particular en la cual una sociedad está constituida para generar poder es su constitución política. El proyecto histórico de la mayoría de las sociedades, incluida la nuestra, es formar a sus miembros de manera que hagan algo más que obedecer o someterse; ellos deben hallarse dispuestos, orientados de tal manera que las autoridades puedan contar con su apoyo activo la mayor parte del tiempo. Tal disposición debe ser cultivada a fin de que el poder sea generado y se halle continuamente disponible. El poder depende en buena medida de una acumulación histórica de disposiciones. Pero las disposiciones no son algo tan trivial como "el comportamiento aprendido". Son demandas inscriptas del tipo de aquellas que el trabajador urbano tiene que "aprender" en las fábricas y los suburbios. El poder no es, por consiguiente, un intercambio o una transacción sino una exacción, una exigencia. Es sostenido por condiciones que se imponen a lo largo del tiempo y que se vuelven acumulativas. Los términos del poder derivan del lugar en el cual la colectividad está localizada y del momento en el cual ella existe. Un lugar está integrado por tierra, recursos y una forma de vida autóctona; el tiempo remite a los ritmos en los cuales los seres viven y las cosas existen: las sociedades definen el tiempo y lo imponen (pienso en la mecanización de la vida animal). Los términos más fundamentales del poder son aquellos que exigen a los miembros de una comunidad prescribiéndoles y proscribiéndoles actividades que permitirán que el poder sea generado y se halle continuamente disponible. El resultado de las condiciones del poder *determina* la identidad política de la colectividad. El poder y la identidad no son fijados nunca de una vez para siempre: son proyectos históricos generados a lo largo del tiempo y que requieren espacio.

La crisis actual es concebida -y así se lo proclama- como una crisis del poder gubernamental, pero es mucho más amplia y profunda que eso. Para preguntarnos ¿en qué debemos convertirnos? debemos primero preguntarnos ¿cómo creemos que somos?

Nuestro punto de partida es el siglo XVIII, cuando la posición soberana de los monarcas fue desafiada por movimientos revolucionarios y cuando, en algunos países, fue proclamada la soberanía del pueblo y las teorías políticas vigentes comenzaron a referirse al "cuerpo (político) del pueblo". Quiero sugerir que en la tradición política norteamericana el pueblo tiene dos "cuerpos", partiendo cada uno de una concepción diferente de identidad colectiva, del poder y de los términos del poder. En uno de esos cuerpos el pueblo fue concebido como políticamente activo, en tanto que en el otro era esencialmente pasivo, sino enteramente. Una de las colectividades era política y democrática y puede ser asimilada a un cuerpo político; la otra era principalmente económica e intencionalmente antidemocrática; su fundamento era más bien una economía política. Cada uno de estos cuerpos tiene una larga tradición en la teoría y en la práctica.

La formulación clásica del cuerpo político fue la Declaración de la Independencia y su carta de presentación de los Artículos de la Confederación. La concepción de la economía política es más compleja: la Constitución, los documentos de *The Federalist*, y los trabajos de Hamilton sobre finanzas, manufactura y la interpretación de los poderes del gobierno nacional. El primer cuerpo político norteamericano fue generado por la revolución de 1776, el segundo por la ratificación de la Constitución.

Para comenzar, la revolución es la acción más radical que un pueblo puede emprender colectivamente. La revolución significa rechazar un modelo establecido de autoridad, negando el poder que fluye de él, y cortando la continuidad entre el pasado y el futuro. La gravedad del acto requiere un pueblo que se pregunte a sí mismo quién es en tanto colectividad, qué justifica la destrucción de su identidad previa y en quién espera convertirse reconstituyéndose a sí mismo.

La grandeza de la Declaración de la Independencia fue su sensibilidad respecto de estas cuestiones y el intento de captar la nueva identidad surgiente. Durante unos diez años los pobladores de la colonia habían protestado contra su estatus en el Imperio Británico. La Declaración capturó y preservó el momento en que los norteamericanos renunciaron a su estatus colonial por el cual se los obligaba a aceptar y a obedecer un sistema de autoridad política sobre el cual ejercían escaso poder y en el cual no participaban directamente. En palabras de la Declaración, los revolucionarios habían determinado "disolver los lazos políticos que... los vinculaban" con la madre patria y "asumir entre las potencias de la tierra posición independiente y equivalente para la cual las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza les daban derecho." En la Declaración se concebía un nuevo tipo de ser político, no el súbdito colonial de un imperio, o inclusive el "ciudadano" que exigía "los derechos de los ingleses" y especialmente el derecho a no ser gravado por una autoridad distante. "... Todos los hombres son creados iguales... con ciertos derechos inalienables... [y] para asegurar estos derechos son instituidos los gobiernos entre los hombres, derivando sus poderes del consentimiento de los gobernados." La nueva concepción iba inclusive más allá de la correspondiente al hombre político de Aristóteles, que sabía a la vez cómo gobernar y ser gobernado. La Declaración apuntaba a un ser humano que no participase meramente en política, sino que colaborase realmente en crear una nueva identidad política, "instituir", "alterar" o "abolir" gobiernos, realizar una "fundación" y organizar el poder. Las verdades "autoevidentes" de la Declaración no fueron, como lo supusieron a menudo las generaciones posteriores, construcciones abstractas e ideales sin base en la experiencia, sino una recapitulación de casi cien años de práctica. No sólo los habitantes de la colonia habían estado practicando algo

cercano al autogobierno por más de un siglo antes de la revolución, sino que durante los años inmediatamente anteriores a ésta habían visualizado y condensado su experiencia de nuevas maneras. Alrededor de dos años antes de la Declaración, habían sido inventadas las comisiones de correspondencia y el Congreso Continental para coordinar la resistencia de las Colonias, y en mayo de 1776, el Congreso instruyó a los asambleístas coloniales para llevar a cabo el único acto político que se compara en significación a aquel de la revolución: la fundación de nuevos gobiernos que deberían "conducir mejor a la felicidad y seguridad de sus electores..."

En la Declaración se resumía una identidad política naciente, la cual se retrotraía hasta Mayflower y las ideas del siglo XVII sobre las asociaciones políticas y religiosas como asociaciones voluntarias. Esa identidad fue perpetuada y fortalecida en el siglo XVIII por dos profundas experiencias políticas, a saber, aquella de la experiencia revolucionaria y de la construcción de nuevos órdenes políticos. Ambas fueron experiencias de acción, de gente común actuando conjuntamente para ordenar su existencia compartida. Así, la Declaración tenía una concepción profundamente política de la identidad colectiva y una concepción profundamente democrática del poder: el poder se fundaba en las deliberaciones de los gobernados y se ejercía dentro de una estructura democráticamente organizada.

A lo largo de la mayor parte de la década de 1780, los estados operaron bajo sistemas poco rígidos de autoridad establecidos por los artículos de la Confederación. Salvo en lo referido a ciertos poderes concernientes a la guerra y a la diplomacia, la Confederación favoreció claramente una condición descentralizada en la cual los estados eran las mayores entidades políticas. Esto manifestaba la difundida creencia de que así la democracia y la igualdad tenían una escala apropiada. El discurso político del día estaba lleno de referencias al sentimiento y la lealtad dirigidos por los estados y las ciudades. A partir de la lectura de estos documentos, se vuelve evidente que los habitantes de la colonia reconocían que la democracia dependía de volver accesible para todos la experiencia política, la verdadera base de la igualdad.

La concepción del cuerpo político como participatorio, democrático e igualitario no significó que las relaciones económicas fueron ignoradas. El énfasis en la participación política estaba directamente relacionado con los grandes debates económicos de las décadas de 1770 y 1780 en torno de las leyes sobre deudas, papel moneda, tasas de interés e impuestos. Aquellos que constituían el cuerpo político y se opusieron a la nueva Constitución tendían a ser pequeños agricultores que sufrían escasez de dinero y de crédito, y que por ello se hallaban con frecuencia endeudados. Ellos veían como natural y deseable que su gobierno "interfiriere" en la economía. La economía no era un objeto sagrado, sino un conjunto de relaciones que debían ser corregidas cuando el bienestar de los miembros lo requería.

Todas las nociones de tal cuerpo político fueron desafiadas a lo largo de la década de 1780 por un movimiento en el que confluían las clases sociales más altas y los intereses económicos más poderosos. Ese movimiento produjo la Constitución con su muy diferente concepción de la colectividad y del poder. Los que elaboraron la Constitución no ocultaron el hecho de que el gobierno representativo fue diseñado, como lo plantea Madison, "para preservar el espíritu y la forma del gobierno popular", pero para mantener apartada su substancia, a fin de que "una injusta e interesada mayoría" no pudiese invadir los derechos y la libertad de las clases propietarias.¹ La nueva Constitución buscaba revertir la orientación del país, bloquear las políticas participatorias y democráticas que florecían en los estados. Esto iba a ser logrado mediante dos abarcadoras modificaciones. Una fue forjar un gobierno nacional que estuviese basado en el principio de representación en lugar de estarlo en la democracia. Salvo en lo que toca a la Cámara de Representantes, ningún funcionario del nuevo gobierno sería elegido directamente por el pueblo. "El pueblo" fue proclamado "el fundamento puro y original de toda autoridad legítima" (Hamilton),² pero ésta fue una fórmula para dar a la Constitución una base legítima, no para promover una ciudadanía activa.

El segundo cambio estuvo dirigido a romper el poder de los estados donde la tradición democrática del cuerpo político se había arraigado. La Constitución creó un sistema centralizado de gobierno con fuertes poderes para regular, gravar, legislar y coercionar a los ciudadanos, quienes, hasta ese momento, habían sido los objetos de las legislaturas de los estados. Así el ciudadano fue ubicado en un conjunto totalmente nuevo de relaciones, con un gobierno que era casi tan remoto como el Parlamento Británico. Al mismo tiempo, los gobiernos de los estados, respecto de los cuales los ciudadanos continuaban muy estrechamente ligados, fueron obligados a ceder o a compartir muchos de los poderes que habían ejercido durante la era de los Artículos de la Confederación, poderes sobre el papel moneda, el comercio y los impuestos.

Hamilton vio que la nueva Constitución se fortalecería sólo si resultaba capaz de granjearse la lealtad de los ciudadanos, apartándolos de sus gobiernos estatales y locales, y de convertirlos -de ciudadanos democráticos- en seres dispuestos a rendir "devida obediencia a la autoridad [del gobierno federal]."³ La transformación de la ciudadanía se daría, según su razonamiento, si las actividades del gobierno nacional penetraban en los estados y localidades de manera de convertirse en parte "de los acontecimientos comunes... de la vida política." El papel de un Estado fuerte sería promover, regular y proteger los intereses económicos esenciales para el poder del Estado -manufactura, comercio, banca e industria-, "aquellos objetos que tocan las cuerdas más sensibles y ponen en

movimiento las fibras más sensibles del corazón humano..." Al apelar al interés de cada uno y a motivos económicos, Hamilton esperaba promover un nuevo conjunto de disposiciones cívicas que fortalecerían "la autoridad de la Unión y los sentimientos de los ciudadanos hacia ella."⁴

La naturaleza de estas "disposiciones" Hamilton mismo usa el término- y su potencial para producir poder fueron asociados por Hamilton con la división del trabajo y con la especialización. "Los resultados del esfuerzo humano -observa- pueden ser enormemente incrementados diversificando sus objetos. Cuando todos los diferentes tipos de industria se dan en una comunidad, cada individuo puede hallar su propio elemento y poner en juego todo el vigor de su naturaleza. Y la comunidad se beneficia por los servicios de sus miembros pudiendo cada uno proporcionar su mayor efecto."⁵

Estas disposiciones iban perpendicularmente contra aquéllas incorporadas en la Declaración y en su concepción del cuerpo político de la sociedad, pues la "comunidad" que invocaban no era una asociación de iguales o de copartícipes. "Diversificando" los "objetos" puestos ante el hombre, la división del trabajo fomentaba "la diversidad de los talentos y capacidades que diferencian a los hombres entre sí." Si bien se pretendía que así las potencialidades humanas se verían fomentadas, no existen dudas de que ese no era el principal propósito de Hamilton. "El agregado de una nueva energía al *stock* general de esfuerzo" tenía como fin "la riqueza de la nación",⁶ o sea, la generación de la base material del poder nacional. La preocupación de Hamilton respecto de las disposiciones humanas que generan poder formaba parte de una estrategia mayor para hacer de la actividad económica la base del orden político. "La posesión" de los "medios de subsistencia, vivienda, vestimenta y defensa" es, escribió, "necesaria para la perfección del cuerpo político, para la seguridad así como para el bienestar de la sociedad; el deseo de cualquiera de éstos es el deseo de un órgano importante de vida y movimiento políticos..."⁷

La estrategia estaba basada en dos supuestos, a saber, que la colectividad estaba simbolizada en el Estado, no en la ciudadanía, y que el poder del Estado deriva de la estructura de la economía.⁸ Una economía política en la cual el Estado estaría fundado en relaciones económicas y actuaría principalmente a través de su rama administrativa iba a ser promovida mediante un sistema de subsidios e incentivos. Esta visión fue luego incorporada en el programa de Hamilton para que el gobierno nacional se hiciese cargo de las deudas de guerra de los estados, establecer un banco nacional ("una máquina política de la mayor importancia para el Estado")⁹ y para fomentar las industrias "jóvenes". Se esperaba que la dinámica del crecimiento económico que sería desatada fomentando el interés individual produciría "el impulso de poder civil necesario para... un gran imperio..." (Hamilton).¹⁰

El acento en la capacidad de la nueva economía política nacional para generar un gran poder no era incidental, sino que ocupaba un lugar central en la audaz concepción de la Constitución, donde se entreveía una sociedad política que se extendería desde la costa atlántica hacia las inexploradas regiones del oeste. "El poder civil adecuadamente, organizado y ejercido es capaz de difundir la fuerza en gran medida, y puede de cierta manera reproducirse a sí mismo en todas las partes de un gran imperio..." (Hamilton).¹¹ Los fundadores comprendieron claramente que un gran Estado, en expansión, era incongruente con un cuerpo político participatorio, pero sabían también que tenían que hacer concesiones a la tradición democrática del "libre gobierno", en la cual, como lo planteó uno de los anti-federalistas, "el pueblo es soberano y su sentimiento u opinión es el criterio de toda medida pública".¹² Ellos optaron por un gobierno representativo porque, como sistema capaz de ser ampliado casi indefinidamente, acordaba más estrechamente con una economía concebida en términos dinámicos. Al mismo tiempo, se esperaba que la expansión al oeste diluyese las pasiones políticas y frustrase la acción política popular. Ampliando él alcance se incrementaría la cantidad de intereses competitivos y con ello se volvería difícil que se formase una voluntad mayoritaria, a partir de gente tan dispersa. "Amplíen la esfera y... harán menos probable que una mayoría integrante de la voluntad general... descubra su propia fuerza y actúe al unísono."¹³ Así, el propósito de los federalistas no fue sólo fundar un Estado fuerte, sino despolitizar al pueblo. Plantearon a los norteamericanos una opción entre la "democracia pura", en la cual un pequeño número de ciudadanos... "se reúne y administra el gobierno en persona" y una república ampliada, en la cual se daba la "delegación del gobierno... a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto."¹⁴ La elección se dio entre una democracia participatoria, con su inherente incapacidad para generar suficiente poder -imagen de Estados Unidos que Hamilton ridiculizó refiriéndose a "una infinidad de *commonwealths* diminutos, contrapuestos, celosos entre sí, las despreciadas nurseries de una discordia incesante..."¹⁵ - y, por otra parte, una república poderosa, "un gran sistema norteamericano, superior al control de todas las fuerzas o las influencias transatlánticas, y capaz de dictar los términos de la vinculación entre el viejo y el nuevo mundo."¹⁶

Los dos cuerpos políticos coexistieron a través del siglo XIX. El cuerpo político participatorio y democrático halló expresión a niveles locales; en el movimiento hacia el oeste que vio a los norteamericanos fundar comunidades a lo largo de su camino e improvisar formas políticas para satisfacer sus necesidades, y en los grandes movimientos populistas de agricultores y trabajadores después de la Guerra Civil. Empero, fue la economía política la que desplegó mayor actividad. Su componente político, el Estado, se volvió más centralizado e integró una burocracia profesional. Bajo las presiones de las guerras mundiales del siglo XX y la Gran

Depresión, el Estado creció en cuanto a tamaño, poder y funciones. La naturaleza de su base económica se modificó sustancialmente, pasando de una sociedad de productores de pequeña escala y pequeños campesinos a una economía integrada dominada por las grandes corporaciones y monopolios y caracterizada por la concentración de riqueza y poder en una cantidad limitada de grandes empresas. A pesar de los conflictos rituales entre "gobierno y empresariado", la unión de la política y la economía se volvió más estrecha, a medida que las implicaciones antidemocráticas y antipolíticas de las características del poder bajo esta forma de colectividad se hicieron más claras.

Después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, se les enseñó a los norteamericanos, y ellos aprendieron ávidamente, a concebirse en la imagen de una nación poderosa, la de mayor poder en el mundo, una superpotencia entre las superpotencias. El poder de los Estados Unidos era capaz de circundar el globo, vigilar el mundo, pretender la luna, e inclusive, si resultaba necesario, destruir la mayor parte de la vida existente en el planeta. "El hombre tiene en sus manos mortales", afirmó John Kennedy en su discurso inaugural, "el poder de abolir todas las formas de pobreza humana y de destruir todas las formas de la vida humana".

Un incidente recordado en los documentos inéditos de Harry Truman expresa perfectamente la autointoxicación de la nación con el poder durante los años de postguerra. Durante las negociaciones para poner fin a la Guerra de Corea, Truman se exasperaba por lo que percibía como tácticas obstruccionistas de los chinos y los rusos, y desahogó su rabia y frustración lanzándoles un ultimátum imaginario: "O ustedes aceptan nuestra equitativa y justa propuesta o serán completamente destruidos".¹⁷

Aunque Truman nunca envió el ultimátum, tales fantasías de poder habían comenzado a obsesionar a los norteamericanos en una medida que trascendía en mucho la necesaria para sostener y proteger la vida colectiva. Lyndon Johnson las expresa para la época espacial: "Estamos, todavía, preocupados respecto de lo que habitualmente algunos consideran el arma última o definitiva... [Pero] existe algo más importante que un arma última, es la última posición, la posición de control total sobre la tierra que reside en algún lugar exterior, en el espacio."¹⁸

Para apoyar un poder que fuese cósmico antes que político, la ciudadanía debería adquirir disposiciones cívicas congruentes con las nuevas formas de poder. ¿Cuáles fueron los nuevos elementos por ser incorporados en la constitución de la colectividad? Uno fue el imperialismo. Los Estados Unidos aceptaron casi todas las oportunidades para extender su influencia a todos los lugares de la tierra, asumiendo la responsabilidad de estabilizar regímenes concebidos como favorables y desestabilizando aquéllos considerados hostiles, como así también de gestar un mercado mundial en el cual los recursos materiales y humanos del globo estuvieran organizados principalmente para beneficio propio. Concordantemente, el norteamericano debía adquirir los atributos de un ciudadano imperial. No sólo debía apoyar las intervenciones militares y económicas en el exterior e identificar su bienestar -su trabajo, su profesión, su misma identidad- con la expansión del poder de los Estados Unidos, sino que debía profesar un patriotismo servil de manera tal que, por ejemplo, se sometiera a tener sus hijos pudriéndose en las selvas malolientes de lugares remotos. El ciudadano imperial podía no ser un ciudadano democrático, dado que el poder imperial exige disposiciones diferentes de aquellas que generan el poder democrático. El poder democrático, como lo ha señalado Tom Paine, es posible cuando la gente "mutua y naturalmente se apoya entre sí."¹⁹ El poder imperial no es meramente más poder, sino algo cualitativamente diferente: es siempre remoto y ejercido lejos de donde viven los ciudadanos. El pueblo no se siente inmediatamente comprometido con él y tampoco se le requiere esto. Las disposiciones necesarias fueron siendo definidas por un código de palabras del Estado imperial: el término "seguridad nacional" sustituye a "bien común" y los "gastos de defensa" son los medios primordiales para promoverla. Cada uno de ellos fue un símbolo que vinculó al ciudadano con las condiciones requeridas por las nuevas magnitudes de poder y las disposiciones de acatamiento que ellas exigían. "Seguridad nacional" significó no sólo no cuestionar el apoyo a un amplio poder discrecional del presidente, sino apoyar, además, los recortes de las libertades civiles y la detención de los disconformes. "Los gastos de defensa" significaron no sólo aplaudir inmensos presupuestos de defensa, sino también identificarse con las instituciones corporativas y financieras que concretamente producen las armas y los empleos bélicos. La nueva visión del poder fue expresada por John Kennedy en su mensaje al Congreso de febrero de 1961: "Los Estados Unidos tienen los recursos naturales y humanos para cubrir las demandas de seguridad nacional... y las obligaciones derivadas de su liderazgo mundial, si bien haciendo progresar simultáneamente el bienestar mutuo. Pero nuestra nación ha estado actuando cada vez más por debajo de sus capacidades económicas."

Estas nociones ampliadas del alcance del poder de los Estados Unidos significaron el fin de la economía política hamiltoniana, con su visión de una poderosa y autónoma nación-Estado fundada en una economía nacional y preocupada por su propio territorio. La nueva época veía el intento del Estado imperial por derivar su poder de la economía internacional y por afirmar su dominación sobre ella. Ese cambio socavaría el marco político establecido por la Constitución original de los federalistas. Las instituciones del gobierno representativo, incluido el sistema de partidos generado para volver plausible el proceso de legitimación de las elecciones

populares, experimentaron un debilitamiento y una declinación. Los sucesores de Hamilton llevarían esto un paso más allá. Si bien se cuidarían de continuar su diatriba en contra de la democracia por despertar expectativas no realistas en la gente y por fomentar el cuestionamiento de la sabiduría superior de las élites, los nuevos dirigentes también se volvieron contra el propio gobierno representativo. Debían pues hallar una nueva base de legitimidad para reemplazar el pacto político que había permitido llevar a las colonias originales y a sus ciudadanos a una "más perfecta unión". Una de esas bases se halló en una forma de acuerdo, de contrato *social* que señalaría el deceso del ciudadano político y el surgimiento del votante norteamericano. A cambio de la cesión de su poder político, y consiguientemente de la práctica de las artes del ciudadano, los norteamericanos serían recompensados con poder de compra y la "soberanía del consumidor".

Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos negociaron los vestigios que quedaban de ciudadanía democrática a cambio de nuevas formas de participación. Querían participar en la economía sobre una base garantizada, para compartir los niveles crecientes de bienes de consumo y el mercado ocupacional en expansión. Al confiar su ser, individual y colectivo, a la economía, los norteamericanos no rechazaron explícitamente los valores políticos de la igualdad, la participación o la soberanía popular; tampoco especificaron que debía otorgarse mayor autoridad y poder discrecional a los funcionarios y burócratas electos, o que un principio elitista, escasamente encubierto como meritocracia, debiera ser el principio social y político dominante.

Mediante un tipo de acción simple que habla tan elocuentemente como las provisiones de cualquier contrato imaginado por Locke, Rousseau o Jefferson, los norteamericanos abdicaron del ámbito de la política, permitiendo que sus compromisos cívicos languidescieran hasta el punto que, hacia la década de 1970, casi el 50 por ciento del electorado no pudiese motivarse como para votar en las elecciones nacionales, mientras que los porcentajes eran aun menores en el caso de las elecciones para los gobiernos locales.

A partir de la década de 1950 la pasividad política fue presentada como una virtud cívica. El requerimiento crucial de la sociedad, así se les dijo cada vez con mayor insistencia a los norteamericanos, era el "liderazgo", y de allí que debiesen siempre buscar presidentes "fuertes" para proporcionar "liderazgo". En cuanto al ciudadano, debería pensarse a sí mismo como desempeñando un "rol" en un "sistema", un rol de apoyo que le exigía sólo que se motivara únicamente en ocasiones y votara de manera que quienes gobernaran pudiesen con ello defender la "autoridad" de sus acciones y exigencias.

Estas disposiciones cívicas, pasivas y diferenciales, constituyeron un complemento natural de las formas de gobierno que rápidamente fueron arraigándose. Durante el mismo período se verificó también el ascenso del administrador, la contraparte del ciudadano apolítico. Esta nueva figura fue notable por gobernar sin que aparentara hacerlo. El administrador combinó capacidad profesional con desprendimiento, escasa presencia o visibilidad y una pronunciada aversión por el discurso público. Su aire no amenazante, técnico, contribuyó a ocultar el autoritarismo inherente a la idea de los "presidentes fuertes". Es un hecho histórico que la responsabilidad por introducir sistemáticamente al administrador "profesional" en el gobierno pertenece al New Deal, la administración que, más que cualquier otra del siglo, se identificó con la "legislación social" y con los políticos y programas que llegaron a constituir las provisiones del "contrato social". El New Deal, adecuadamente, se refirió poéticamente a los "administradores" describiéndolos como hombres con "una pasión por el anonimato".²⁰

Los términos del nuevo contrato social y la despolitización del cuerpo político de la sociedad fueron confirmados en un momento específico en el cual pareció como que los Estados Unidos podían dar un primer paso orientado a reclamar su vida política.

A lo largo de la mayor parte de la década de 1960, y a comienzos de la siguiente, una oposición continua fue articulada contra los gobernantes legítimos de la sociedad y contra sus políticas. Esta resistencia se originó fuera de las instituciones políticas tradicionales y permaneció externa a ellas. La mayor parte de sus expresiones fueron locales, espontáneas e improvisadas. El rechazo comenzó con las manifestaciones a favor de los derechos civiles a comienzos de la década de 1960 y ganó impulso en las rebeliones de los *campus* universitarios al promediar la década; ya fueron un presagio las revueltas que se dieron en los *ghettos* urbanos de las principales ciudades. El clímax se alcanzó en la "primavera cambodiana" de 1970, cuando la extensión de la guerra de Vietnam a Cambodia provocó la mayor expresión de la oposición antibelicista.

Existen muchos componentes en estos acontecimientos -rebelión juvenil, resentimiento por la discriminación racial, formas culturales provocativas (como el rock), costumbres sexuales en un proceso de cambio radical, etcétera- pero también hay en ellos la posibilidad de una repolitización de los Estados Unidos, de una revocación del contrato social que fue sofocando la vida política. Empero, estas manifestaciones nunca fueron más allá de los *campus* y de los *ghettos*. Las familias norteamericanas de clase obrera las vieron en general con hostilidad, así como la abrumadora mayoría de la población de clase media y media-baja.

El fracaso de los políticos de oposición de la década de 1960 en afirmarse y en alentar disposiciones diferentes acerca del poder y de la autoridad fue puesto claramente de manifiesto por la aplastante victoria electoral de

Nixon en 1972. El obtuvo una mayoría electoral superior a la de cualquier candidato presidencial anterior. No se trató solamente de un fracaso de las fuerzas de repolitización reunidas flojamente en torno de la candidatura de McGovern, sino de una prueba importante de la forma en que los términos del contrato social habían minado la voluntad política de la mayoría de los norteamericanos. Las revelaciones de Watergate, que desnudaron una pauta sistemática de mentira, corrupción, ejercicio arbitrario del poder y calculada invasión de los derechos de los ciudadanos, como de una continua intimidación de funcionarios públicos y de ciudadanos por parte de los organismos civiles y militares del gobierno federal, deberían haber sacudido la legitimación de la mayoría de nuestras instituciones políticas básicas. En lugar de ello, la crisis fue contenida y luego resuelta mediante la renuncia del presidente.

Centrándose en los "abusos de poder" del presidente y los de sus secuaces, quienes manejan el sistema se las arreglaron para evitar la cuestión fundamental, a saber, en qué se ha convertido la sociedad política, para que Richard Nixon estuviera siendo castigado por hacer lo que sus predecesores inmediatos habían hecho menos crudamente, para que alguien con una trayectoria pública de haber mentado, fingido, y de haberse ofrecido a los principales intereses corporativos y financieros del país hubiera sido reelegido por una mayoría popular sin precedente de electores. La conclusión no es tanto que las élites tuvieron éxito en contener la crisis de legitimación, sino que los ciudadanos habían hecho respetuosamente honor a su compromiso. Debido a los términos del contrato social, el norteamericano común había acordado no intervenir activamente en la vida ciudadana y no desafiar la extendida autoridad y discrecionalidad de los funcionarios públicos, el creciente poder de la burocracia sobre la vida cotidiana, o la escasamente encubierta estructura de poder donde las instituciones públicas y las corporaciones privadas negocian diariamente acerca de la dirección de la sociedad, el uso de sus recursos y de su riqueza común.

La despolitización de los Estados Unidos es la condición previa necesaria de la actual demanda de "reindustrialización", que se ha convertido en la consigna de las poderosas fuerzas económicas y políticas que se reúnen en torno de la visión de una sociedad más racionalmente planificada. Su manifiesto es el *Business Week*. Exigiendo un "nuevo contrato social" que reemplace la política del enfrentamiento por una de "colaboración" entre la mano de obra, el empresariado y las universidades, esa influyente voz del país corporativo fríamente observó que "el lanzamiento de un contrato social debe tener prioridad sobre las aspiraciones de los pobres, de las minorías, de los ambientalistas". Declarando que "la meta no debe ser otra que la reindustrialización de los Estados Unidos", se afirma claramente la visión antidemocrática, corporativista del país: "... la cuestión de si los Estados Unidos se reindustrializan depende de que las élites empresariales, políticas y burocráticas puedan reunirse para proporcionar la conducción".²¹

Esta visión, por la ausencia de otras consideraciones, adopta el consejo formulado irónicamente por Bertold Brecht en *The solution*: "¿No sería más simple en ese caso que el gobierno disuelva el pueblo y elija otro?"

La crisis actual está centrada en la economía, pero no en problemas económicos como tales. La crisis es del poder y de la identidad colectiva debido a que "la economía" ha llegado a encarnar la identidad de la colectividad y a servir como fundamento de su poder. Según una encuesta de 1977, casi el 70 por ciento de los norteamericanos creía que si bien la economía podía experimentar cierto mejoramiento, era básicamente sólida. Este voto de confianza respecto de "la economía" presenta un agudo contraste con los hallazgos de una encuesta de 1979, en donde la mayoría de los norteamericanos (el 55 por ciento) estimó que el "sistema político" requería una revisión o se hallaba totalmente desactualizado. La lección cívica contenida en este contraste había aparecido en una encuesta ligeramente anterior, en la cual el 96 por ciento de los entrevistados declara que "los norteamericanos deben estar listos para sacrificar el sistema de libre empresa". Evidentemente se había producido un profundo desplazamiento de la lealtad de los ciudadanos, en la medida que se declaraban a favor de desembarazarse de una parte significativa de su orden político y, al mismo tiempo, anunciaban que estaban preparados para sacrificar un sistema económico, inclusive, aparentemente, en favor de uno que no existió en ningún lugar salvo en la prosa de las inspiradas propagandas de Mobil Oil y del Citibank.

Históricamente el gobierno de Carter ha desempeñado un papel central en cuanto a expresar el significado de "la economía", la nueva y despolitizada forma de colectividad. Jimmy Carter percibió correctamente que para tal tipo de colectividad la búsqueda de "energía" sería el equivalente moral de la guerra, que "en el campo de batalla de la energía... podemos ganar nuevamente el control de nuestro destino común", y que "cada barril de petróleo" ahorrado "nos da más libertad... que un control mucho mayor sobre nuestras propias vidas, de manera que solucionar nuestra crisis energética puede también ayudarnos a superar la crisis espiritual de nuestro país".²² La misión histórica del pseudo populismo de Jimmy Carter -con sus lamentaciones acerca de una pureza perdida y de un gobierno cada vez más distante del "pueblo"- era proporcionar una base de masas al nuevo Estado, de carácter corporativo, burocrático, tecnocrático y empresarial. "Estamos hablando sobre los Estados Unidos de América", atronó Jimmy Carter en su discurso aceptando la red denominación, "y aquellos que dan por vencido a este país en tanto superpotencia económica van a descubrir cuán equivocados están".

Ese discurso merece ser reconsiderado, pues constituye quizás la afirmación más importante de la naturaleza de

la nueva colectividad. Al declarar que su gobierno había "establecido las bases de una nueva época económica", puso de manifiesto que esas nuevas bases representarían una reversión de las políticas sociales modestamente progresivas de la tradición del New Deal en el Partido Demócrata. "Reduciremos radicalmente las regulaciones gubernamentales y devolveremos el sistema de libre empresa a las líneas aéreas, a las compañías de camiones y al sistema financiero del país..."

Luego enterró el New Deal para siempre e identificó las preocupaciones de la nueva colectividad: "Este es el cambio más importante en la relación entre el gobierno y el mundo de los negocios desde el New Deal. Hemos incrementado decisivamente nuestras exportaciones. Hemos revertido la declinación [sic] en investigación básica y desarrollo. Hemos creado más de 8 millones de nuevos empleos, el mayor incremento en la historia del país."

La nueva colectividad en la nueva era económica estaría dedicada a la "revitalización de la industria norteamericana", no del cuerpo político de la sociedad. El nuevo ciudadano sería absorbido por "la labor concreta de modernizar la industria estadounidense", no por reclamar su ser político o por recrear la vida en común. El discurso del presidente fue otra expresión de las fuerzas que están explotando la crisis actual para acelerar el movimiento de la sociedad hacia una forma nueva y no democrática. La ideología de esta nueva forma parte de sostener que la crisis se halla localizada en la economía, cuyos fracasos derivan del hecho de que los productos estadounidenses ya no son competitivos en el mercado mundial. Nuestra posición competitiva declinante, se dice, surge de una menor productividad, ineficiencia, falta de "disciplina" por parte de la fuerza de trabajo y una "mentalidad adversa" por parte de los sindicalistas. Pero no sólo debemos "reindustrializarnos" sino emular el modelo adecuado, que resulta ser el de Alemania Occidental o el de Japón. "Tenemos dos caminos por seguir", advirtió un Secretario de Trabajo Adjunto, "el de los ingleses o el de los japoneses."²³

Durante los últimos meses algo que aparece sospechosamente como una campaña concertada ha sido montada contra los "ciudadanos" de la actual economía política, confrontando el perezoso y pendenciero obrero norteamericano con el entusiasmo regimentado de los trabajadores japoneses, quienes han aparecido en varios programas de televisión haciendo flexiones con música envasada durante los "cortes", formulando sugerencias constructivas sobre la forma de perfeccionar más sus líneas de producción altamente automatizadas y exhibiendo la serenidad de una fuerza de trabajo a la cual le han sido dados reaseguros paternalistas de la cuna hasta la tumba. Las cámaras de televisión no se apartan de las fábricas para explorar las implicaciones políticas de un ciudadano modelo que combinaría, en partes iguales, automación y feudalismo; mucho menos los medios invitan a su audiencia a considerar las amplias implicaciones de "aprender" de Alemania Occidental y Japón, sociedades con antiguas y ricas tradiciones autoritarias y pasados totalitarios aún frescos, mientras se deja de lado prácticamente la única sociedad, la inglesa, cuyos valores políticos fueron alguna vez los más cercanos a los propios.

La crisis actual es inherente a la forma del poder del Estado constituido por una economía -y basado en ella- cuyo "dinamismo" y cuyas "innovaciones" imponen un precio terrible bajo la forma de destrucción de los valores, capacidades y conocimiento recibidos, y de las instituciones humanas básicas para transmitirlos. La familia, la escuela y la ciudad han sido tan dañadas y distorsionadas que producen más desesperación que felicidad. La actual constitución del poder y el contrato social que lo legitima han producido la presente crisis, la cual tiende a agravarse. La crisis tiene dos dimensiones interrelacionadas: las magnitudes sin precedentes de poder a disposición del Estado norteamericano y la cualidad peculiarmente abstracta de él. Piénsese en el propuesto sistema de misiles MX, con sus trayectorias a través de los espacios "vacíos" de los estados occidentales, con su carga letal apareciendo y desapareciendo y su poder totalmente desvinculado de cualquier comunidad. Son un símbolo del poder contemporáneo, el cual se afirma destruyendo las relaciones humanas existentes y luego expandiendo su lógica en el vacío que ha creado.

Lo notable respecto de estas formas de poder es que sabemos perfectamente que son, en última instancia, inhumanas. Todos saben que las dos instituciones más poderosas de nuestra sociedad, la "corporación" privada y la burocracia "pública" son irresponsables, no confiables e ineptas. Resulta igualmente evidente que los males sociales que producen son inherentes a ellas y que ningún artero análisis costo-beneficio puede servir para comprender la genética y la lesión ecológica hecha a las generaciones aún no nacidas, mucho menos aun para intentar captar las terribles demandas que están siendo incesantemente acumuladas por cada generación de pobres permanentes y de los sectores racialmente excluidos. Ambas son jerárquicas y por consiguiente tienden al autoritarismo y al elitismo. Por último, todos saben, asimismo, que estas instituciones han traicionado y continúan traicionando la promesa de los Estados Unidos: ellas han conformado una sociedad con desigualdades cada vez mayores en la riqueza que se traducen en crecientes desigualdades en cuanto al poder, a las posibilidades de vida y de acceso a los valores culturales y educacionales. Nada sino una larga revolución, orientada a desmontar la actual estructura de poder, tiene mucho sentido. Es ilusorio creer que las mismas modalidades de poder, las cuales por su constitución agotan a los seres humanos, a la sociedad y a la naturaleza a un ritmo terrible, pueden ser simplemente "dadas vuelta" y orientadas en una dirección más benigna; o bien que las mismas disposiciones humanas hacia el poder -pasividad de los más y control a manos de unos pocos-

servirán para un nuevo orden social como sirven para éste.

La tarea es enorme, difícil, sin fin, llena de incertidumbres. Necesitamos nuevas formas, nuevas escalas, nuevos seres. Las formas deben ser lo que son verdaderamente las constituciones: formas de vida para cuidar una parte de la tierra y los seres que están en ella. Esa constitución no puede ser dada: sólo puede llegar a existir en la actualidad concreta de gente que tome las condiciones inmediatas elaborándolas constantemente para hacerlas corresponder con la forma que se piense deben vivir seres iguales y en ese tiempo en que deben ordenar su vida juntos.

Traducción de "People's *two bodies*" realizada por Mario R. dos Santos.

¹ Cooke, Jacob E., compilador, *The Federalist*, Wesleyan University Press, 1961, Middletown, Connecticut, 1961, dim, 22, Pág. 64.

² Idem, Pág. 46.

³ Idem, núm. 27, Pág. 174.

⁴ Idem, Pág. 173.

⁵ "Report on Manufactures", en Papers on Public Credit, Commerce and Finance by Alexander Hamilton, McKee, Samuel, jr., compilador, Columbia University Press, 1934, pág. 195.

⁶ Idem, Pág. 196.

⁷ *The Papers of Alexander Hamilton*, Syrett, H. S., compilador, 26 vols., Columbia University Press, Nueva York, 1961-1979, vol. 10, Pág. 291.

⁸ Véase el análisis de Hamilton en McKee, S., compilador, ob. cit., págs. 227, 231.

⁹ *Report on a National Bank*, en Syrett, H. S., compilador, ob. cit., vol. 7, págs. 305 y sigs.

¹⁰ *The Federalist*, ob. cit., núm. 13, Pág. 81.

¹¹ Ibidem.

¹² *The Anti-Federalists*, Kenyon, Cecilia M., compilador, Bobbs Merrill, Indianápolis, 1966, Pág. 7.

¹³ *The Federalist*, núm. 10, Pág. 64.

¹⁴ Idem, págs. 61 y 62.

¹⁵ Idem, núm. 9, págs. 52 y 53.

¹⁶ Idem, núm. 12, Pág. 73.

¹⁷ Informe del *New York Times*, 3 de agosto de 1980, L-22.

¹⁸ Johnson, Lyndon B., *The Vantage Point*, Populary Library, Nueva York, 1971, Pág. 276.

¹⁹ *The Complete Writings of Thomas Paine*, Foner, Philip, compilador, The Citadel Press, Nueva York, 1945, vol. 1, Pág. 6.

²⁰ President's Report on Administrative Management, Washington, D.C., 1937.

²¹ *Business Week*, 30 de junio de 1980, págs. 4, 5 y sigs.

²² Discurso del 15 de julio de 1979.

²³ *New York Times*, 18 de agosto de 1980.